



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03769-2016-PHD/TC

ICA

GLADYS

GRACIELA

GENG

CAHUAYME

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 4 de abril de 2017

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Graciela Geng Cahuayme contra la resolución de fojas 42, de fecha 24 de mayo de 2016, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente la demanda; y.

ATENDIENDO A QUE

Demanda

1. Con fecha 16 de noviembre de 2015, doña Gladys Graciela Geng Cahuayme interpone demanda de *habeas data* contra la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, encargada de los asuntos judiciales relativos al Ejército del Perú, y la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Solicita que se le otorgue copia certificada del cargo del oficio que la primera de ellas dirigió a la Jefatura de Administración de Derechos de Personal del Ejército con la finalidad de comunicar la Resolución 4, de fecha 30 de junio de 2011, sentencia judicial que adquirió la autoridad de cosa juzgada, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y recaída en el Expediente 25316-2009-0-1801-JR-CI-06. Allí se ordenó a la Comandancia General del Ejército del Perú reajustar la ración orgánica única conforme al Decreto Supremo 040-2003-EF y otorgar devengados, intereses legales y costos a favor de don Gilberto Sosa Rufino.

Auto de primera instancia o grado

2. El Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica declaró improcedente la demanda por cuanto la demandante no cumplió con agotar la vía administrativa, pues debió interponer recurso de apelación tras la denegatoria ficta de su solicitud.

Auto de segunda instancia o grado

3. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica confirmó la apelada y señaló que la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, encargada de los asuntos judiciales relativos al Ejército del Perú, no constituía una entidad pública,



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03769-2016-PHD/TC

ICA

GLADYS

GRACIELA

GENG

CAHUAYME

sino más bien un órgano encargado de la representación y defensa jurídica de una entidad pública determinada; en este caso, del Ministerio de Defensa. Por ello, no se encontraba facultada para entregar la información solicitada conforme a lo estipulado en el artículo 2, inciso 5, de la Constitución Política del Perú.

Análisis de procedencia de la demanda

4. Contrariamente a lo señalado por los jueces que conocieron la presente demanda, el Tribunal Constitucional estima que se ha cometido un manifiesto error de apreciación en el caso de lo esgrimido en la primera instancia o grado, debido a que el argumento por el cual no se habría agotado la vía administrativa resulta contrario a lo expresamente estipulado en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, que establece que en los procesos de *habeas data* no resulta necesario agotar la vía administrativa. De otro lado, y en cuanto a lo indicado por la segunda instancia o grado, porque a la luz del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional tanto los jueces como el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades al logro de los fines de los procesos constitucionales. Siendo ello así, resulta claro que no debió rechazarse la demanda con base en consideraciones de carácter estrictamente formal como la invocada respecto a la correcta identificación de la emplazada, máxime cuando se verifica una posible afectación del derecho invocado por la recurrente.
5. En virtud de lo expresado, y teniendo en cuenta que las resoluciones impugnadas en el presente proceso han sido expedidas incurriendo en un vicio procesal insubsanable que afecta trascendentalmente la decisión de primera y segunda instancia, resulta de aplicación al caso el segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, el cual a la letra dice:

Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio [...].

En consecuencia, este Tribunal considera que ambas resoluciones deben anularse, a fin de que se admita a trámite la demanda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, con los votos singulares de los magistrados Ledesma Narváez, Blume Fortini y Sardón de Taboada, que se agregan,



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03769-2016-PHD/TC

ICA

GLADYS

GRACIELA

GENG

CAHUAYME

RESUELVE

1. Declarar **NULA** la resolución recurrida de fecha 24 de mayo de 2016 y **NULA** la resolución de fecha 4 de diciembre de 2015, expedida por el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica.
2. **DISPONER** que se admita a trámite la demanda de *habeas data*.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES
URVIOLA HANI
RAMOS NÚÑEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:

.....
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03769-2016-PHD/TC

ICA

GLADYS GRACIELA GENG CAHUAYME

**VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI,
OPINANDO PORQUE ANTES DE RESOLVERSE LA CAUSA DEBE
PREVIAMENTE CONVOCARSE A VISTA DE LA CAUSA, EN APLICACIÓN DE
LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE, PRO ACTIONE, CELERIDAD,
INMEDIACIÓN Y ECONOMÍA PROCESAL**

Discrepo, muy respetuosamente, del auto de mayoría que, sin vista de la causa, declara nula la resolución recurrida de fecha 24 de mayo de 2016 y nula la resolución de fecha 4 de diciembre de 2015, expedida por el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, y dispone que se admita a trámite la demanda de autos.

Considero que antes de decidir en el acotado sentido, debe convocarse a vista de la causa y dar oportunidad a ambas partes para que informen oralmente y fundamenten su posición, en caso consideren que ello convenga a sus derechos, por las siguientes razones:

- Los procesos constitucionales se desarrollan conforme a los principios *pro homine*, *pro actione*, celeridad, intermediación, dirección judicial y economía procesal, conforme lo dispone el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
- Esto último se aplica evidentemente durante todo el desarrollo del proceso, particularmente en instancia del Tribunal Constitucional, lo que es acorde con su rol de garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, entre los que se encuentra el derecho fundamental de defensa.
- En tal sentido, resulta desacorde con tales principios que el Tribunal Constitucional niegue a las partes comparecer personalmente o por medio de sus abogados a una audiencia pública de vista de la causa y hagan uso de la palabra a los efectos de que expongan los argumentos que a su derecho convengan, lo que reviste mayor gravedad si se tiene en cuenta que en los procesos constitucionales que cautelan los derechos fundamentales, como el habeas corpus, el amparo y el habeas data, el uso de la palabra está garantizado tanto en primera como en segunda instancia, conforme lo disponen los artículos 36, 53 y 58 del Código Procesal Constitucional.
- Como lo he sostenido en el fundamento de voto que emití en el Expediente 0225-2014-PHC/TC la audiencia pública de la vista de la causa es de vital importancia en el desarrollo de los procesos constitucionales. En esta se escucha a las partes y a sus abogados; se genera un debate que coadyuva en la sustanciación del proceso; se absuelven preguntas y se despejan dudas; y así el juez constitucional obtiene mayores elementos de juicio para resolver, pues se forma una mejor convicción respecto del caso materia de controversia. En esta audiencia se materializa, como en pocas ocasiones dentro del proceso, el principio de intermediación. Además de ello, el acto de la vista de la causa es el último acto procesal relevante previo a la emisión de la sentencia, ya que, salvo circunstancias excepcionales, después de su culminación la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03769-2016-PHD/TC

ICA

GLADYS GRACIELA GENG CAHUAYME

causa queda al voto, por lo que resulta de suma importancia que los justiciables participen en su realización.

- Por lo demás, declarar nulo todo lo actuado y admitir a trámite la demanda, implica que el litigante deba volver a transitar por el Poder Judicial, lo que alarga mucho más su espera para obtener justicia constitucional; espera de por sí tortuosa y extenuante, y que puede tardar varios años. Tal postura no se condice con una posición humanista, con los principios constitucionales que he referido, ni con una real y efectiva tutela de urgencia de los derechos constitucionales.
- Por lo tanto, en orden a un mayor análisis ante la eventual posibilidad de entrar a resolver el fondo del asunto, a mi juicio, resulta obligatorio, además de respetuoso de los derechos fundamentales de las partes y de los principios constitucionales antes citados, que se realice la vista de la causa ante los Magistrados del Tribunal Constitucional, lo que se está negando con la expedición del auto de mayoría.

Por tales motivos, voto a favor de que el Tribunal Constitucional dé trámite regular a la causa, convoque a audiencia para la vista de la misma, oiga a las partes en caso soliciten informar y admita nuevas pruebas si estas se presentan, así como conozca y amerite las argumentaciones que esgriman en defensa de sus derechos, en un marco de respeto irrestricto a su derecho de defensa, como última y definitiva instancia que agota la jurisdicción interna.

S.

BLUME FORTINI

Lo que certifico:

.....
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03769-2016-PHD/TC

ICA

GLADYS

GRACIELA

GENG

CAHUAYME

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas Magistrados, en el presente caso disiento de la posición de la mayoría de declarar nulo lo actuado y disponer la admisión de la demanda, pues a mi consideración lo que corresponde es declarar improcedente el recurso de agravio constitucional. Mis argumentos son los siguientes:

1. La demandante interpone demanda de habeas data para que el Procurador Público del Ministerio de Defensa encargado de los asuntos judiciales del Ejército del Perú le entregue copia certificada del cargo del oficio cursado a la jefatura de Administración de Derechos de Personal del Ejército comunicando la sentencia judicial que adquirió la autoridad de cosa juzgada en el proceso judicial seguido por Gilberto Sosa Rufino. Aduce que no obstante haber requerido dicha información a la entidad demandada, ésta no ha dado respuesta a su pedido.
2. Empero, de autos no consta que la recurrente hubiere cumplido con requerir a la demandada, mediante documento de fecha cierta, que le haga entrega de la información solicitada en la demanda, tal como lo exige el artículo 62 del Código Procesal Constitucional como requisito de procedibilidad en los procesos de habeas data. En efecto, de la revisión del documento de la página 2, a la que se remite la demandante para probar el cumplimiento de dicho mandato, no consta que la demandada lo haya recibido pues no tiene el sello que así lo acredite.
3. Por lo expuesto considero que el presente recurso carece de especial trascendencia constitucional, encontrándose incurso en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

Lo que certifico:


Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03769-2016-PHD/TC

ICA

GLADYS

GRACIELA

GENG

CAHUAYME

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA

Con el debido respeto por mis colegas, me adhiero al voto singular de la magistrada Ledesma Narváez.

En el presente caso, no está acreditado que, antes de la presentación de su demanda de *habeas data*, la recurrente haya solicitado la entrega de la información requerida mediante un documento de fecha cierta.

En consecuencia, al no estar demostrado el cumplimiento del requisito especial de procedibilidad previsto en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, no corresponde pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

Por tanto, mi voto es por declarar **IMPROCEDENTE** el recurso de agravio constitucional en aplicación del acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida, con calidad de precedente, en el Expediente 00987-2014-PA/TC concordante con el artículo 11, inciso b, del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.

S.

SARDÓN DE TABOADA

Lo que certifico:

Flávio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL